

PROYECTO DE LEY 186/2021

“Por medio de la cual se establece la enseñanza sobre la protección legal y constitucional a la mujer” – Ley “Ni una más”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º. Objeto. La presente ley tiene como objeto establecer la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional a la mujer, enfatizando cualquier forma de violencia y discriminación que pueda aplicarse en su contra.

ARTÍCULO 2º. Enseñanza sobre la protección legal y constitucional a la mujer en Colombia. Adiciónese el literal g al artículo 14º de la Ley 115 de 1994, que define la enseñanza obligatoria en los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal, el cual quedará así:

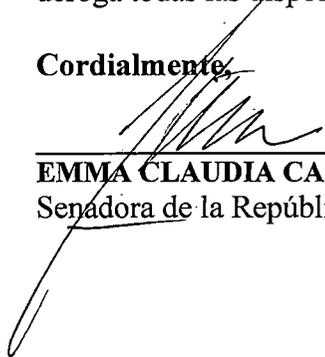
“f) La enseñanza de la protección legal y constitucional a la mujer en Colombia, enfatizando la lucha contra la violencia física, sexual, psicológica y económica, de conformidad con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, la ley 1257 de 2008 y la jurisprudencia incluyendo rutas para la prevención atención y denuncia ante cualquier riesgo o caso de violencia.”

ARTÍCULO 3º. Contenido. Los contenidos transversales, temáticos y de estudio, sobre la protección legal y constitucional a la mujer en Colombia, serán fijados por el Ministerio de Educación y contruidos con base en la Constitución, la ley y la jurisprudencia.

ARTÍCULO 4º. Transitoriedad. Sin perjuicio del principio de autonomía escolar, el Ministerio de Educación Nacional dispondrá del término máximo de un año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, para la construcción del lineamiento de los contenidos curriculares que deberán implementar las instituciones educativas.

ARTÍCULO 5º. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,


EMMA CLAUDIA CASTELLANOS
Senadora de la República


ANGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL
Representante a la Cámara


ANA MARÍA CASTAÑEDA
Senadora de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY

“Por medio de la cual se establece la enseñanza sobre la protección legal y constitucional a la mujer” – Ley “Ni una más”

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Este proyecto de ley fue presentado en la legislatura 2019 – 2020 por las senadoras Emma Claudia Castellanos, Ana María Castañeda y la Representante Angela Sánchez acompañadas por miembros de la bancada de Cambio Radical.

Si bien, el proyecto alcanzó a surtir sus cuatro debates obligatorios, por diferencias en los textos en las plenarias de Cámara y Senado se archivó.

ANTECEDENTES

La actividad educativa es una actividad de amplia y magna prospectiva que debería pensar en el futuro y, en consecuencia, adelantarse a él para así formar personas aptas para controlar y mejorar la vida en sociedad. Por tanto, la educación no es solamente un derecho humano básico, sino también un componente esencial del desarrollo económico y social, y que, al planificarse adecuadamente las inversiones en educación, se obtiene un buen dividendo, y especialmente en los países menos desarrollados, donde se logra reducir la pobreza.¹ La educación es un derecho humano fundamental y un bien público porque gracias a ella nos desarrollamos como personas y como especie, y contribuimos al desarrollo de la sociedad. El ser humano necesita de la educación para desarrollarse plenamente como tal. Desde este punto de vista, la finalidad de la educación es cultivar la humanidad², por lo que la educación tiene un valor en sí misma y no sólo como herramienta para el crecimiento económico o el desarrollo social, como suele concebirse desde visiones más utilitaristas. El pleno desarrollo de la personalidad humana es la principal finalidad que se le atribuye a la educación en los instrumentos de Derechos Humanos de carácter internacional.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y que ha de favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. En la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se agrega el desarrollo del sentido de dignidad y de capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. En la Convención de los Derechos del Niño se añade a lo anterior la finalidad de inculcar al niño el respeto por el medio ambiente natural, por su identidad cultural, su idioma y el respeto a los valores nacionales y al de otras civilizaciones. El derecho a la

¹ REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2007

² Savater, Fernando, educar es universalizar, 2000.

educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales y, en consecuencia, de la ciudadanía. Difícilmente se podrá acceder a un empleo digno, o ejercer la libertad de expresión o de participación, si no se tiene educación.

Esto supone que no puede ser considerada como un mero servicio o una mercancía negociable, sino como un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, asegurar, proteger y promover. Los servicios pueden ser diferidos, pospuestos y hasta negados, mientras que un derecho es exigible y justiciable por las consecuencias que se derivan de su violación o irrespeto³.

Como la educación constituye un derecho social básico y un elemento impulsor del desarrollo de los pueblos, se convierte en el principal recurso y en la mayor riqueza que puede tener un país, es decir, se convierte en el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de una ciudadanía democrática y responsable, indispensable para la construcción de sociedades avanzadas y justas que persiguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por eso que la educación basada en las prerrogativas de respeto de la dignidad humana y de la igualdad podrían significar una baja notable en las cifras de violencia, por lo cual resulta fundamental apoyar este proyecto de ley, el cual está fundamentado en la educación para lograr a mediano y largo plazo un cambio radical en la concepción de los derechos de los demás, en este caso de la mujer.

Avances legislativos en América Latina en prevención de violencia contra la mujer

País	No. de normas principales	No. de normas Complementarias	Eficiencia
Anguila	1	-	Baja
Antigua y Barbados	3	1	Baja
Argentina	9	3	Baja
Aruba	1	-	Baja
Bahamas	2	-	Baja
Barbados	2	1	Baja
Belice	3	1	Baja
Bolivia	9	4	Muy baja
Brasil	10	5	Baja
Chile	5	3	Media
Costa Rica	8	5	Baja
Cuba			Media (datos no oficiales)
Dominica	-	3	Baja (sanciona violencia sexual pero no existen garantías de protección legal a la mujer violentada)

³ Blanco, R. (2006). La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la escuela hoy. Revista electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 4(3), pp. 1-15.



Ecuador	8	1	Baja
El Salvador	4	4	Baja
España	4	2	Media, con mejoras pequeñas.
Granada	1	1	Baja
Guatemala	8	5	Baja
Guyana	4	1	Baja
Haití	3	1	Baja
Honduras	8	1	Baja
Jamaica	6	2	Baja
México	7	3	Baja
Nicaragua	6	2	Baja
Panamá	6	2	Baja
Paraguay	6	3	Baja
Perú	12	3	Baja
Puerto Rico	5	4	Baja
República Dominicana	4		Baja
San Cristóbal y Nieves	2	1	Baja
San Vicente y las granadinas	2	-	Baja
Santa Lucía	2	3	Baja
Surinam	2	1	Baja
Uruguay	8	1	Baja
Venezuela	4	-	Sin datos actuales

*Elaboración propia con datos de la CEPAL, actualizados 2019

Las cifras anteriores consolidan la premisa de que no existen legislaciones que minimicen de manera categórica de violencia contra la mujer. Es una problemática a nivel internacional que ha generado el pronunciamiento de múltiples especialistas en el tema, que han venido definiendo la violencia, desde sus diferentes formas, y/o fuentes, puesto que en los últimos años las lesiones personales y el feminicidio han sido frecuentes en las cifras de violencia en Latinoamérica.

Para el caso del feminicidio, el concepto fue atribuido a Diana Russell, originaria de Sudáfrica quien lo definió como “*el asesinato de mujeres por parte de hombres por el hecho de ser mujeres*”⁴. Dicho concepto ha venido variando y adaptándose a diferentes contextos.

⁴ Russell, Diana. The origin and Importance of the term Femicide. (Consultado: 3-04-2019). Disponible en: http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html

Así, Marcela Lagarde, mexicana, cuyo foco de investigación han sido los asesinatos en mujeres en Ciudad Juárez, vincula el concepto de feminicidio al componente de impunidad definiéndolo como un “conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado⁵”.

La violencia filio-parental, por su parte, es un fenómeno que se ha ido abordando progresivamente en los estudios de violencia intrafamiliar, lo que no quiere decir que no hayan existido previamente casos de dicha violencia; de hecho, desde antes de la década de los sesenta del siglo XX, ya existía literatura que la describe específicamente. Llama la atención que hay literatura que apunta a que la población preadolescente es la que mayor tendencia tiene a realizar este tipo de maltrato, aunque hay estudios que orientan a que es la población adolescente la que tiene la mayor tendencia. En cuanto a las características de la persona autora de la agresión en el contexto de la violencia filio-parental, hay literatura contradictoria entre sí, dado que hay estudios que sugieren que los varones son quienes más cometen este tipo de violencia, mientras que otros sostienen que son las mujeres; no se observa una concordancia tampoco en la modalidad de agresión empleada dependiendo si la persona agresora es un varón o una mujer⁶. Sin embargo, se ha visto que el modelo familiar monoparental es el más correlacionado con la violencia filio-parental, así como aquellos hogares con dificultades de índole financiero.

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

La presente ley tiene como objeto establecer la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional a la mujer, en su favor, y en contra de cualquier forma de violencia que pueda aplicarse en su contra. La educación como motor de cambio está llamada a ser transformadora de la sociedad, por eso este proyecto de ley busca en el fondo de que los estudiantes de educación formal adquieran competencias desde edades tempranas para así lograr desde la escuela una transformación cultural en el país en lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer.

JUSTIFICACIÓN

Colombia tiene una de las más ricas legislaciones en el mundo en consonancia con la protección a la mujer. Desde la promulgación de la Constitución de 1991 el legislador ha dirigido sus esfuerzos en mitigar las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Sin embargo, las cifras siguen creciendo año a año y no parece que exista una fórmula que nos permita disminuir las devastadoras cifras que han venido impactando negativamente a las mujeres.

⁵ Informe Forensis 2018, página 70

⁶ Marín, S. y Martínez Luz (2016). Violencia Filio Parental: un fenómeno emergente. Tesis Inédita. Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia
Cuadro Sivigila – Informe de 8 de marzo de 2020

CIFRAS ACTUALES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA

A pesar del gran compendio normativo que existe en Colombia, y de su amplia estructura legal en comparación con otros países latinoamericanos, para prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra la mujer, las cifras de los últimos años en Colombia nos indican que la 'medicina' en vez de menguar parece incrementar la violencia de manera progresiva.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA, en su más reciente reporte, manifiesta las siguientes cifras, las cuales son aterradoras:

Tipo de violencia	Número de mujeres violentadas	Promedio diario
Violencia intrafamiliar	15.401	42 mujeres
Violencia de pareja o expareja	42.753	117 mujeres
Feminicidios	138	0.33 mujeres
Violencia sexual (Violencia sexual contra niñas y adolescentes)	22.115 18.927	60.5 mujeres 52. niñas y adolescentes
TOTAL:	80.407	9.17 mujeres

Esto significa que cada seis minutos y medio en Colombia una mujer es violentada.

SITUACIÓN COMPARADA POR SEXO (cifras Instituto Nacional de Medicina Legal, compilado por Sisma)

a. Frente a la violencia familiar

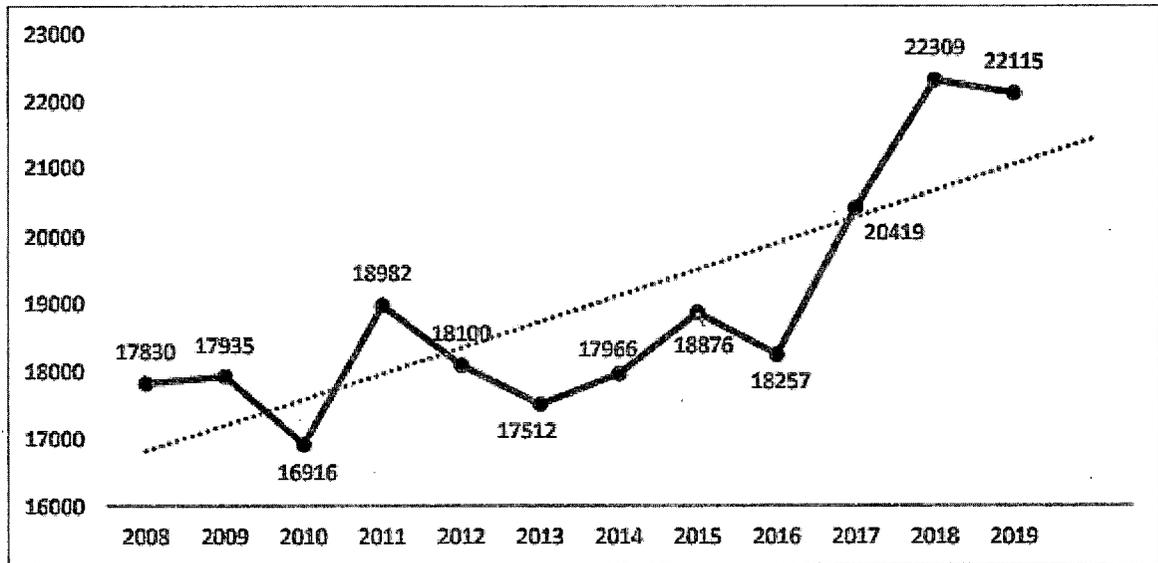
En el año 2019, se realizaron 25.785 exámenes médico legales a personas que fueron víctimas de violencia intrafamiliar. De estos, 15.401 correspondieron a mujeres, es decir, el 59,73% del total, y 10.384 a hombres, es decir, el 40,27%. Esto representa una relación mujer a hombre de 3/2 aproximadamente, es decir que por lo menos una mujer fue agredida en el contexto de la violencia intrafamiliar cada 35 minutos. De 2018 a 2019 se observa un descenso de 9,45% en el número de mujeres víctimas, al pasar de 17.009 casos reportados en 2018, a 15.401 en 2019⁷.

b. Frente a la violencia sexual

En el año 2019, se realizaron 25.695 exámenes médico legales por presuntos hechos de violencia sexual. Del total, 22.115 corresponden a mujeres, es decir, el 86,07%; y 3.580 a hombres, es decir, el 13,93%. Esto significó que por cada hombre agredido, al menos 6 mujeres fueron víctimas de violencia sexual. Esto se traduce en que por lo menos una mujer

⁷ Informe 8 marzo 2020, Sisma Mujer

fue agredida sexualmente cada 24 minutos. Con respecto al comportamiento de la violencia sexual, de 2018 a 2019 se registra un descenso de 0,87% al pasar de 22.309 presuntos casos de violencia sexual contra las mujeres en 2018, a 22.115 casos para 2019⁸.



(Cuadro realizado por Sisma mujer comparando los últimos 10 años)

c. Violencia sexual contra niñas y adolescentes

Las niñas y adolescentes son la población de mujeres que más sufren la violencia sexual. De los 22.115 casos registrados por el INML en 2019, 18.927 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, el 85,58% del total de mujeres agredidas, lo cual indica que cada 28 minutos por lo menos una niña o adolescente fue agredida sexualmente. Dentro de este grupo, las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas (48,43%), seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años (25,98%).

Como ha sido documentado, los presuntos agresores son personas cercanas a las víctimas, así lo demuestra que de los 18.927 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes reportados en 2019, solo en 633 casos (3,34%) el presunto agresor se registró como desconocido, en 9.749 casos (51,51%) el presunto agresor fue un familiar y en 3.505 casos fue un conocido (18,51%). Otra cifra reveladora es que en 14.671 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, correspondiente al 77,51% del total, se reporta la vivienda como escenario del hecho victimizante⁹.

Estas cifras demuestran que los años 2018 y 2019 han sido los más altos de la historia del país (aun sin tener datos consolidados de 2020 y 2021, lo cual manifiesta una seria

⁸ Ibidem, pp 10

⁹ Ibidem, pp 11

preocupación de la efectividad de las normas en Colombia, sobre todo en lo que respecta a la violencia sexual donde según las cifras demostradas anteriormente, las niñas y adolescentes son las mayores víctimas.

¿Por qué un proyecto de ley para atacar la violencia contra la mujer, desde la educación escolar?

Como denotan las cifras, no existe en Colombia una legislación contundente que frene el aumento de la violencia en Colombia, si bien el país posee una rica legislación en materia de derechos hacia la mujer, todos esos contenidos normativos están enfocados en la protección de la mujer a nivel constitucional y legal, además de medidas posteriores a la violencia. Sin embargo, ni las mujeres, ni el resto de la población han sido educados en relación con los contenidos mismos de la norma. Este proyecto de ley presenta una novedad y es que tiene un enfoque preventivo de la violencia desde la educación.

Lastimosamente, las normas existentes hoy en día sancionan las conductas posteriores a la violencia, pero este proyecto de ley genera competencias tanto en hombres como en mujeres en su formación básica y media que les permitan ser ciudadanos respetuosos y coherentes respecto a la protección de la mujer. Con este proyecto, se previene desde la escuela toda conducta que atente contra las mujeres, haciendo hincapié en los derechos consagrados por la Constitución y la ley a la mujer en el país.

No solo es educar al hombre en las cuestiones de respeto a la mujer, sino también a la mujer en los asuntos de igualdad, dignidad humana y respeto. Por lo anterior, este proyecto de ley está enfocado en disminuir esas cifras a mediano y largo plazo, a través del fortalecimiento en la educación formal de los derechos de las mujeres.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Desde la promulgación de la carta magna en Colombia el legislador de manera atenta ha visto la necesidad de que en el país se implementen contenidos normativos que protejan a la mujer de toda situación de violencia. De las normas que protegen a la mujer de violencia en el país encontramos las siguientes:

Fundamento constitucional

- Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
- Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

- Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progeneración responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

- Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto, gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

Fundamento legal

- **Ley 248 de 1995** aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Entró en vigor el 15 de diciembre de 1996. A los efectos de esta Convención, debe entenderse por violencia contra la mujer toda acción o conducta basada en su género que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado.

- **Ley 294 de 1996** por medio de la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta ley tiene por objeto desarrollar el artículo 42, inciso 5° de la Constitución Política, mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades de violencia en la familia a efectos de asegurar su armonía y unidad. Define medidas para proteger a las víctimas y establece procedimientos para los distintos casos.
- **Ley 575 de 2000**, que modifica parcialmente la Ley 294 de 1996. Traslada la competencia en materia de violencia intrafamiliar de los jueces de familia a los comisarios de familia y, a falta de estos, a los inspectores de policía. Otorga asistencia a las víctimas de maltrato y tipifica los delitos contra la armonía y la unidad familiar: maltrato físico, psíquico o sexual.
- **Ley 1257 de 2008**, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer, se reforman el Código Penal, el de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
- **Ley 1542 de 2012**. Con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección a los derechos de las mujeres, esta ley suprime el carácter de querrelable y desistible a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, y establece la investigación oficiosa de éstos. Reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 1994, Código de Procedimiento Penal
- **Ley 1639 de 2013**, por la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido.
- **Ley 1719 de 2014**, por la cual se modifican los artículos de las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.
- **Ley 1761 de 2015**, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones (Ley Rosa Elvira Cely).

Decretos

- **Decreto 652 de 2011**. Reglamenta la Ley 294 de 1996, reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000.
- **Decreto 4796 de 2011**. Define las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente a las mujeres víctimas de violencia a través de los servicios

que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud, e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud.

- **Decreto 4798 de 2011.** Establece para el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación de entidades territoriales certificadas en educación y los Establecimientos Educativos, obligaciones en torno a la identificación, denuncia, prevención y abordaje de situaciones de violencia contra la mujer en el contexto educativo; y regula las acciones de formación y sensibilización de la comunidad educativa frente a las violencias contra la mujer, y estrategias que permitan crear ambientes escolares protectores de situaciones de violencia.
- **Decreto 2733 de 2012.** El decreto tiene el objetivo de establecer los requisitos necesarios para hacer efectiva la deducción de que trata el artículo 23 de la Ley 1.257 de 2008.
- **Decreto 2734 de 2012.** El decreto tiene el objetivo de establecer los criterios, condiciones y procedimientos para el otorgamiento de las medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008.

Jurisprudencia relacionada

- **C297-16 (sentencia feminicidio)** En el derecho internacional de los derechos humanos, la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a estar libres de violencia tiene dos fuentes. De un lado, surge de la lectura sistemática de las disposiciones neutras que proscriben la violencia y reconocen los deberes de protección a la vida, la seguridad personal, la integridad, la honra, la salud y la dignidad de las personas, entre otros, con aquellas normas que establecen: (i) el derecho a la igualdad en el reconocimiento y protección de esos derechos; y (ii) la prohibición de discriminación por razón del sexo, pues imponen un deber de protección especial por razón al género. De otro lado, surge de las disposiciones que explícitamente consagran protecciones y deberes alrededor de la erradicación de la discriminación contra de la mujer y de la prevención, investigación y sanción de la violencia contra ésta.
- **T27-17 (Protección especial de la mujer)** La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una

“(…) situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”.

En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional

cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar.

- **T239-18** Entre las obligaciones que el Estado debe desarrollar, se encuentran acciones de prevención que incluyen la promoción de la igualdad y la prohibición de discriminación en razón en el ámbito educativo, así como el fomento a la denuncia de conductas que atenten contra los citados valores, y la información acerca de los mecanismos jurídicos de los cuales disponen las víctimas para que se desarrolle adecuadamente la investigación y sanción de delitos como el acoso o el abuso sexual.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

El presente proyecto de Ley consta de 5 artículos, necesarios para que de manera transversal se trabaje desde la educación por combatir todas las formas de agresión contra la mujer, y ayudar a que las mujeres sean conscientes de sus derechos, y de las protecciones legales a las que ellas mismas pueden acceder, pero también busca formar valores cívicos en los estudiantes de educación formal para que en su vida adulta tengan criterios propios que eviten la violencia contra la mujer.

Es por esta razón, que la presente iniciativa será un gran aporte que se articula así:

- El artículo primero incluye el objeto del proyecto de ley el cual es implementar en la enseñanza de los derechos de las mujeres en la educación básica y media.
- El segundo artículo establece la enseñanza de los derechos de las mujeres de manera obligatoria en las instituciones de educación formal.
- El artículo tercero establece que la autoridad para fijar las temáticas de enseñanza será el Ministerio de Educación.
- El artículo cuarto le da un término al Ministerio de Educación de un año a la promulgación de la ley para que la enseñanza de los derechos de las mujeres comience a operar en el país.
- El artículo final establece la vigencia

IMPACTO FISCAL

El presente proyecto de ley, al no ordenar gasto, no comprende un impacto fiscal y en consecuencia no requiere cumplir con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, ni se encuentra condicionado al avál del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PROPOSICIÓN

En concordancia con los términos anteriores, en nuestra condición de miembros del Congreso de la República, y en uso del derecho consagrado en el artículo 152 de la Constitución Política de Colombia, nos permitimos poner a consideración de los Honorables Miembros del Congreso de la República el presente proyecto de ley, teniendo en cuenta que el mismo preserva los principios constitucionales de especial protección a la población vulnerable, existencia de la necesidad de garantía de derechos fundamentales como la vida, y el deber del Estado de protegerla en condiciones dignas, para su discusión y votación.

Cordialmente,


EMMA CLAUDIA CASTELLANOS
Senadora de la República


ANGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL
Representante a la Cámara


ANA MARÍA CASTAÑEDA
Senadora de la República